

Imprimir

Que Colombia ha manejado de muy mala manera la crisis del COVID 19 no es un secreto para nadie: las medidas de cuarentena que se tomaron en marzo, y que se supone debían darnos tiempo para preparar nuestro sistema de salud para soportar los embates del contagio, mostraron ser ineficaces, pues a hoy no solo tenemos más de 489 mil infectados y 15.619 personas muertas (siendo el 8vo país con mayor número de infectados en el mundo y el 12vo en muertes[1]), y con el agravante de haber liderado durante dos semanas el top mundial de muertes por cada millón de habitantes.

Al mismo tiempo, Colombia ocupa otros deshonrosos y preocupantes primeros lugares a nivel mundial: en mayo y junio el desempleo alcanzó niveles superiores al 20% (en las principales 13 ciudades estuvo por encima del 23%) el mayor nivel de desempleo entre los países de la OCDE, la caída de las exportaciones (entre enero y mayo se redujeron en 25,7%), y una contracción del PIB que en lo corrido del año marca un -7,4%.

Es decir, que se cerró la economía para salvar vidas y a la larga tenemos que no solo no se lograron salvar vidas, sino que los cierres generaron una crisis sin precedentes en la economía y empleo nacional. En ambos frentes, las decisiones del gobierno han sido totalmente erráticas, tardías, o en el mejor de los casos insuficientes. Y la clave para entender el porqué de todos estos errores podemos encontrarla en el manejo del presupuesto público.

El gobierno nacional tomó en marzo y abril una serie de decisiones iniciales bajo el marco del Estado de Emergencia y la principal herramienta fue la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) que se financió principalmente con recursos provenientes de préstamos forzosos tomados del Fondo de Ahorro y Estabilización y del Fondo de Pensiones Territoriales.

Desde el inicio, hubo serios cuestionamientos sobre la transparencia y la calidad de las fuentes de financiación del Fondo, y especialmente sobre el empleo de sus recursos. En términos de la transparencia, el mismo gobierno generó muchas dudas en los anuncios presidenciales en los cuales se hablaba de cifras gigantes en planes de inversión (\$117 billones), los cuales luego fueron cuestionados y desmentidos por el Observatorio Fiscal de la

Universidad Javeriana y que al final terminaron siendo apenas \$29,6 billones (apenas 1/5 parte de los recursos que el gobierno anunciaba). El gobierno ha practicado en este caso su conocida estrategia de mentir con la contabilidad, adicionando a los recursos del FOME, otros que ya estaban aprobados en el presupuesto y que por ende no se podían contar como “recursos nuevos”.

Igualmente, el uso de los recursos ha sido una fuente enorme de discusión: desde el principio fue claro que los programas diseñados para aplicar los recursos del FOME iban a ser intermediados por el Sistema Financiero local. De tal forma que los únicos programas de subsidios directos que iban a llegar a las familias, eran lo que ya estaban en los programas de subsidios focalizados de Familias en Acción, Adulto Mayor y el “nuevo” programa de Devolución del IVA, los cuales se entregaron a través de los bancos, dejando al menos \$75 mil millones a los bancos en términos de costos de transferencia (al menos \$1.200 por giro).

Pero esto era apenas la crema del ponqué, porque el gobierno se decidió por un modelo de “endeudamiento garantizado”, una lógica en la cual en lugar de llevar los recursos directamente a las empresas y personas que lo necesitaban urgentemente, los estacionó esperando que el Sistema Financiero aprobara créditos que contarían con garantías por parte del gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG).

A la fecha (19 de agosto) del total de recursos dispuestos en el FNG para el programa “Unidos por Colombia” (\$24,2 billones) para garantizar la cobertura de los créditos solicitados por pequeños y medianos empresarios y trabajadores independientes, apenas se han desembolsado \$6.3 billones (un 29,3%). Esto es así porque los bancos han impuesto un criterio ordinario para identificar empresas que puedan ser apalancadas por estos recursos, y muchas de ellas han sido rechazadas para obtenerlos, con lo cual no se pueden obtener las garantías.

Así mismo el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) que es la respuesta tardía e insuficiente al clamor de muchos sectores para aprobar un subsidio a las nóminas de las empresas, tuvo como foco a las entidades financieras a las cuales se les giran los recursos, y

no a las empresas mismas, los problemas de postulación y el pequeño estímulo (apenas un 25% del salario mínimo percibido por el trabajador) han sido las principales atenuantes del programa. Adicional a ello, el programa se enfocó solamente en empresas formales y la mayor parte del empleo que se ha perdido en el sector informal, por ende, no logró contener la pérdida masiva de empleos.

Y para más preocupaciones, a la fecha no se conoce un informe consolidado de los impactos del programa, de los recursos empleados ni de los giros realizados, consolidando un manto de opacidad sobre los recursos empleados en la pandemia.

Otros programas como los del Fondo Solidario para la Educación, creado para apoyar con créditos a las instituciones educativas y las familias que tienen dificultades para cubrir los costos educativos, tuvo desde el inicio unos fondos reducidos y no ha servido para salvar de la crisis a la enorme cantidad de instituciones educativas que hoy por hoy se encuentran insolventes. Nuevamente el programa de créditos condonables ha hecho muy difícil el acceso, y mientras tanto las familias y las instituciones educativas se hunden en una crisis tremenda que amenaza con la pérdida de más de 200 mil empleos en el sector. De este programa tampoco hay informes sobre su avance y resultados.

Finalmente, los recursos para la salud han sido quizás los más lentos en ejecutarse, pues según el reporte del portal Razón Pública, de julio de este año, para aquel entonces “de cada 10 pesos dispuestos por el gobierno para atenderla salud en la pandemia, se ha ejecutado menos de un peso”, no creo que la situación a hoy haya cambiado sustancialmente.

En su conjunto, los diferentes programas creados por el gobierno para responder a la crisis económica y sanitaria tienen desempeños muy pobres, los recursos no llegan a donde se necesitan y mientras tanto, los bancos son los grandes ganadores de este desorden: cobran comisiones por las transferencias, se quedan con las rentabilidades de la intermediación de recursos públicos y hasta ganan cuando el gobierno se financia, como pasó con la operación de reducción de los encajes bancarios.

El gobierno nacional, liderado por Iván Duque se ha dedicado a parodiarse así mismo en televisión todos los días, a la defensa de la indefendible actitud del líder del Uribismo y a hacer salidas en falso, pero no se ha puesto en la función de responder a las verdaderas necesidades del país, lo de Duque no es un problema de enfoque, lo de Duque es un problema de competencia y falta de capacidad para ocupar la presidencia, y como eso no va a cambiar en los próximos dos años, es difícil que esa situación cambie...ojalá me equivoque.

[1] Adicional a ello también hay que aclarar que Colombia ocupa el 9no lugar a nivel global en número de recuperados, lo cual es lógico por la cantidad enorme de infecciones.

Jairo Bautista

Foto tomada de: Noticentro - Canal 1